

C.A. de Concepción

xsr

Concepción, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

VISTO. SE REPRODUCE LA SENTENCIA APELADA Y SE TIENE, ADEMÁS, PRESENTE:

PRIMERO: Ambos litigantes se alzaron contra la sentencia definitiva de 19 de mayo de 2022, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en la causa Rol **C-1407-2020**, caratulada **“SANHUEZA con CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO”**, que resolvió:

“I.- Que, se hace lugar a la demanda enderezada en lo principal de la presentación de 21 de febrero de 2020, solo en cuanto se condena al demandado Fisco de Chile, a pagar al demandante don Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, la suma de \$30.000.000.-

Esta suma se pagará reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor desde que la presente sentencia quede ejecutoriada a la fecha del pago efectivo, y devengarán, asimismo, intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional menores a un año, que deberán pagarse sobre la suma reajustada desde que el demandado se encuentre en mora.

II.- Que, se rechazan las excepciones perentorias de pago, reparación satisfactiva y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de 20 de junio de 2020.

III.- Que, no se condena en costas al demandado por haber tenido motivo plausible para litigar.”

SEGUNDO: En las peticiones concretas de su recurso, la parte demandante solicitó a esta Corte confirmar *“...la sentencia definitiva de primera instancia, con declaración respecto del daño moral, en el sentido de condenar a la demandada a pagar por este concepto en beneficio de la víctima y actor en esta causa, por el daño causado, la suma de \$ 400.000.000.-, o la suma que S.S. se sirva fijar de acuerdo al mérito del proceso, a la suma antes señaladas deberán sumársele los reajustes de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), o de quien haga sus veces, los intereses corrientes para operaciones reajustables, desde que se produjo el daño hasta el momento del pago efectivo, o la fórmula que Ssa. , estime bien regular.*

Se condene en costas a la demandada tanto de las costas personales como procesales de la causa y del recurso, entendiendo que ha sido totalmente vencida.”

Para ello considera que la jueza de primera instancia no se hizo cargo de las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas contra el actor y de las cuales fueron responsables Agentes del Estado, como también la situación personal de deterioro físico y psíquico experimentada por su representado, desde que fue víctima de estos



hechos, junto con el daño moral sufrido por éste, perjuicios que perduran hasta la fecha y que, estima, no fueron debidamente justipreciados por la Jueza del *A Quo*.

TERCERO: Por su parte, en el recurso del Fisco de Chile se formulan como peticiones concretas a resolver por esta Corte, acoger “...*el presente recurso, resuelva que se **se revoca** conforme a derecho dicha sentencia y, en su lugar, decida que se rechaza en todas sus partes la demanda de indemnización de perjuicios deducida en contra del Fisco de Chile. En subsidio, para el evento que se decida su confirmación, se efectúe declaración que regule prudencialmente el daño rebajando los montos de la indemnización conforme lo argumentado en capítulo 3º de este recurso, denominado “En subsidio, respecto del monto de la indemnización”, regulándola en una suma prudencial marcadamente inferior a la impuesta por la sentencia que se recurre.*”

Al fundamentar el recurso, el representante del Fisco señala como agravios de la sentencia recurrida el haber rechazado la excepción de reparación satisfactiva, reiterando las argumentaciones vertidas al momento de contestar la demanda, en cuanto a la improcedencia de la reparación demandada, ya que el actor fue debidamente indemnizado.

Acusa como segundo agravio el rechazo de la excepción de prescripción, considerando que el fallo en alzada incurrió en apreciaciones erradas y contrarias a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de los años 2003, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013 de la cual reproduce extractos de algunas de las sentencias citadas. También refiere sentencias dictadas por esta Corte los años 2016, 2017 y 2018. Al efecto afirma que las normas de Derecho Internacional no consagran la imprescriptibilidad de las acciones indemnizatorias.

Como tercer agravio se refiere a la falta de acreditación del daño moral y su entidad, señalando que en la sentencia no hubo un análisis pormenorizado de la prueba rendida, resultando evidente que el daño moral no se encuentra acreditado, siendo la prueba rendida insuficiente para darlo por establecido, recayendo en el actor el *onus probandi* de ese hecho controvertido.

En cuanto al cuarto agravio, impugna que el fallo cuestionado haya condenado al Fisco de Chile a pagar una indemnización con reajustes e intereses que no corresponden a los que fueron demandados por el actor, quien se limitó a solicitar que los recargos a que debía ser condenado el Fisco, consideraran el periodo comprendido entre la fecha de notificación de la demanda y la de su pago efectivo, pero sin petición subsidiaria concreta alguna que habilitara al Tribunal ordenarlos para periodo distinto al demandado, como ocurrió en la sentencia recurrida, cometiéndose un error de derecho y una infracción a la competencia específica del Tribunal *A Quo*, determinada por las peticiones específicas de la demandante.

Finalmente, la demandada apeló contra el monto de la



indemnización otorgada, solicitando que, para el evento de una sentencia de alzada confirmatoria, el fallo de segunda instancia declare que se rebaja su quantum, al no haberse acreditado la pretensión indemnizatoria, ni haberse considerado el monto de los beneficios percibidos por el actor, en virtud de las leyes reparatorias, el cual, según lo informado por el IPS, asciende a la cantidad de \$30.607.092.

CUARTO: Son hechos de la causa, en tanto no fueron controvertidos por el Fisco de Chile, los siguientes:

1º) Don Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra, fue víctima de prisión política y tortura, según consta en la nómina del Informe Valech I, bajo el número 22.685. A la fecha del golpe militar era bastante conocido, al ser profesor de los hijos del personal de la Armada, además, de ser dirigente de la Junta de Vecinos de la Villa Cruz del Sur, donde vivía junto a su familia;

2º) Apenas ocurrido el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, don Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra, fue detenido en su domicilio, ubicado en la Cooperativa Naval Cruz del Sur de la comuna de Talcahuano, en un operativo a cargo de personal de la marina y carabineros, quienes ingresaron a su casa fuertemente armados, apuntando a sus tres hijos y a su cónyuge, a quienes agredieron, rompiendo todo el mobiliario y objetos que se encontraban en esa vivienda, siendo amarrado con alambre, subido a una camioneta de la empresa Sudamericana de Vapores y trasladado hasta la Comisaría que entonces estaba ubicada en calle Armando Alarcón del Canto, sector de Hualpencillo, donde estuvo por tres días, siendo objeto de diversas torturas; desde ahí lo trasladaron a la Base Naval de Talcahuano, después a la Isla Quiriquina y, finalmente, al Fuerte Borgoño.

En todos los lugares donde el demandante estuvo privado de libertad, fue víctima de apremios ilegítimos y de torturas –por ejemplo, sumergían y mantenían su cabeza dentro de un recipiente lleno de aguas servidas, frecuentemente recibía golpes de puño, pie y objetos contundentes en innumerables ocasiones, también se le hacía participar en simulacros de fusilamiento-;

3º) Antes de ser detenido, el actor era una persona tranquila, con un proyecto de vida futuro junto a sus tres hijos y su cónyuge, pero con posterioridad al tiempo de prisión y tortura, se transformó en una persona violenta y dura, puesto que se endureció para sobrevivir, bloqueando sus emociones, actitud que, con el tiempo, afectó a su familia y a sus hijos, debiendo vivir el duelo de perder a su primera cónyuge que se suicidó, junto con la detención de sus hermanos, también por motivos políticos;

4º) El actor Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra estuvo detenido, aproximadamente un año, al ser dejado en libertad, se reunió con el Relator Especial de las Naciones Unidas del Comité Pro Paz, a quien le relató sus vivencias en el Campo de Concentración;

5º) Producto de esta traumática experiencia física y psicológica,



recurrentemente comenzaron a manifestarse en el demandante Sanhueza Saavedra, episodios de carácter físico y psicológicos que se mantiene hasta la actualidad, viviendo, como todos los ex prisioneros, con secuelas que le hacen recordar lo vivido, anda siempre “empastillado”, vive con dolores, mareos, insomnios y frecuentes pesadillas, camina con dolor en sus riñones y su calidad de vida empeora cada día más;

QUINTO: Resulta necesario y oportuno recordar una vez más, que el 11 de noviembre de 2003, transcurridos 13 años desde que se restableció el Estado de Derecho en nuestro país, durante el gobierno del Ex Presidente, S.E. Ricardo Lagos Escobar, se dictó el Decreto N° 1040, mediante el cual se creó la *“Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el Esclarecimiento de la Verdad acerca de las Violaciones de Derechos Humanos en Chile”*, cuyo objetivo, de acuerdo a las palabras del propio gestor, fue determinar el universo de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, entre septiembre de 1973 y marzo de 1990; lo que se materializó en un Informe que consta de más de 500 páginas, elaborado con 28.000 testimonios considerados válidos (se recibió testimonio de 35.865 personas, residentes en Chile como en el extranjero); de los que, con la debida prudencia y cautela, se dejó constancia en el mismo informe.

Conjuntamente con ese informe, la Comisión elaboró un listado con los nombres de las personas a quienes se les reconoció la calidad de Presos Políticos y Torturados, arrojando un total de 27.153 personas.

SEXTO: Posteriormente, y con ocasión de la labor de la Comisión, fue dictada la Ley N° 19.992, publicada el 24 de diciembre de 2004, que *“Establece Pensión de Reparación y Otorga otros Beneficios a Favor de las Personas que indica”*, cuyo artículo primero, contenido en el Título I, denominado *“De la pensión de reparación y bono”*, dispone: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de Prisioneros Políticos y Torturados”, de la Nómina de personas reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el Decreto Supremo N° 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

El artículo segundo, establece que la pensión anual aludida, ascendería a \$1.353.798 para aquellos beneficiarios menores de 70 años de edad; a \$1.480.284 para aquellos beneficiarios mayores de entre 70 y 75 años y, \$ 1.549.422 para los beneficiarios de 75 o más años de edad. Dicha pensión se pagaría en 12 cuotas mensuales de igual monto, siendo reajutable conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979, o en las normas legales que reemplacen dicha disposición.

SÉPTIMO: Por otro lado, mediante la Ley N° 20.874,



publicada con fecha 29 de octubre de 2015, que *“Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile”*, de acuerdo a su artículo primero, se otorgó un aporte único en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000.-, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N° 19.992 y N° 20.405, respectivamente. El inciso tercero del artículo primero de la citada ley 20.874, dispone: *“Con todo, el aporte a que se refiere este artículo será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.”*

OCTAVO: Respecto a la excepción de pago o reparación integral, correctamente rechazada por el fallo que se revisa, es dable señalar que esta Corte adhiere a lo sostenido por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en orden a que el hecho de reconocer el Estado la condición de *“Preso Político y Torturado”* constituye un acto unilateral, y por consiguiente, sus efectos, entre los que se cuenta el pago de una pensión a las víctimas, no constituye una indemnización en los términos pedidos en la demanda, ya que, para que una tesis como la sostenida por el Fisco de Chile pudiera prosperar, tendría que estar claramente establecido en cada una de las leyes reparativas, la incompatibilidad de los beneficios contemplados en esa normativa con las acciones indemnizatorias respectivas, cuyo no es el caso.

NOVENO: Por otra parte y en relación a la excepción de prescripción cuyo rechazo constituye uno de los agravios denunciados por el Fisco de Chile en su recurso de apelación, resulta necesario indicar, tal como lo señaló la Corte de Apelaciones de La Serena en los autos Rol 488-2021, que la acción indemnizatoria planteada tiene su origen en la perpetración de delitos de lesa humanidad por parte de agentes del Estado, que han cometido violaciones a los derechos humanos amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales, lo que impone su necesario y obligado resarcimiento, de manera que una decisión contraria conculca la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-



1990, beneficios de carácter económico o pecuniario.

DÉCIMO: El principio rector en la materia, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el de la obligación de los Estados de reparar las violaciones de derechos humanos. Sobre el punto, los órganos del sistema interamericano han señalado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda violación de una obligación internacional que haya producido daños, comporta el deber de reparar adecuadamente a cada víctima (Caso Velásquez Rodríguez v/s Honduras. Sentencia de 21 de julio de 1989 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Por lo demás, como bien ha dicho nuestro Máximo Tribunal, las acciones civiles entabladas por las víctimas, tendientes a conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5° inciso segundo y 6° de la Constitución Política de la República.

UNDÉCIMO: Por otro lado, se debe tener presente que los tratados internacionales no son la única fuente de derecho internacional, desde que resulta posible extraer los principios que rigen en la materia de otro tipo de fuentes, como son las que emanan de órganos colegiados, siendo el más importante de ellos la Asamblea General de Naciones Unidas, a lo que debe agregarse la labor de interpretación que corresponde a los órganos o comités encargados de la aplicación de los principales tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, en lo que mira a la imprescriptibilidad de las acciones civiles, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en el año 2005 el *“Conjunto Actualizado de Principios para la Protección y la Promoción de los derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad”*. En dicho documento se contempla como Principio 23, restricciones a la prescripción, señalando en lo pertinente: *“La prescripción no se aplicará a los delitos graves conforme el derecho internacional que sean por naturaleza imprescriptibles. Cuando se aplica, la prescripción no podrá invocarse en las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación.”* Adicionalmente, en el año 2006 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los *“Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones”*. El principio 7 de ese instrumento establece: *“Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.”*



DUODÉCIMO: En concordancia con los instrumentos referidos precedentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo en un caso que atañe a nuestro país: *“...la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos. En este sentido, hay que tener en cuenta que las consecuencias de las violaciones flagrantes de los derechos humanos son el resultado de los crímenes más deleznables que, según opiniones jurídicas muy acreditadas, no deben estar sujetos a prescripción. Además, está suficientemente probado que, para la mayoría de las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos, el paso del tiempo no ha borrado las huellas, sino que todo lo contrario, pues ha provocado un aumento del estrés postraumático que ha requerido todo tipo de ayuda y asistencia material, médica, psicológica y social durante mucho tiempo.”*

DECIMOTERCERO: A partir de los antecedentes latamente referidos en los motivos precedentes, no cabe duda que la imprescriptibilidad de las acciones en materia de delitos de lesa humanidad se extiende igualmente al ámbito de las acciones civiles que persiguen la reparación del daño ocasionado.

DECIMOCUARTO: Ahora bien, en lo que concierne al monto indemnizatorio, cuestionado por ambos litigantes, cabe tener presente que tal y como denuncia el demandante, el fallo de primera instancia no fundamenta suficientemente su decisión y no se hace cargo, más que someramente, de la particular situación de quien exige reparación, pese a que se trata de una víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que estuvo ilegalmente privada de libertad por casi un año, periodo durante el cual fue torturado sistemáticamente por agentes del Estado en los diferentes lugares donde estuvo detenido.

Especial importancia reviste para determinar la magnitud y extensión del daño causado, cuyos efectos aún perduran pese al transcurso de casi cinco décadas de haber sufrido esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, son las secuelas de ese maltrato que le hacen recordar lo vivido, andar siempre *“empastillado”*, vivir con dolores, mareos, insomnios y frecuentes pesadillas, caminar con dolor en sus riñones; en definitiva detentar una calidad de vida que cada día empeora más. A esos efectos se deben agregar los daños psicológicos que presenta, referidos tanto por los testigos que declararon en la causa, como por el Informe de Daños a Consecuencia de Prisión Política, Tortura, Tratos Cruels y Degradantes, agregado al proceso, elaborado el 14 de octubre de 20190 por la psicóloga Eleonora Moreno Queirolo, profesional del Programa PRAIS DSS Concepción – documento que fue acompañado en la oportunidad procesal correspondiente con citación y bajo apercibimiento legal y no objetado por la parte demandada-, cuya lectura permite conocer el relato



pormenorizado entregado por el actor Sanhueza Saavedra de las torturas, tratos crueles y degradantes, agresiones, vejaciones y humillaciones a las cuales se vio sometido durante el tiempo de su detención.

En el informe consta que el demandante nació el 16 de marzo de 1944, que a la fecha del quiebre institucional era profesor, dirigente gremial y poblacional y que era conocido por su apoyo al gobierno de la Unidad Popular. Fue detenido en septiembre de 1973 y estuvo privado de libertad hasta el mes de octubre de 1974.

Se relatan y detallan los diversos tipos de tortura física, psicológica y sexual de que fue víctima el demandante: golpizas colectivas; torturas por azotes; tortura por posiciones forzadas; tortura por trabajos forzados; tortura por azotes con agua salada; tortura por lesiones corporales deliberadas; tortura por aplicación de descargas eléctricas; tortura por colgamiento; tortura por posición; privación prolongada de alimentos y agua; privación de uso de servicios para aseo personal; privación de acceso a servicios higiénicos; privación de lecho y abrigo nocturno; interrupción sistemática del sueño del prisionero; encierro en condiciones de hacinamiento; tortura por exposición; amenazas de muerte hacia el prisionero y su familia; trato verbal degradante; desorientación espacial y temporal inducida; privación sensorial; incomunicación con el mundo exterior; tortura de carácter sexual por golpes reiterados y aplicación de descargas eléctricas en sus genitales y ser obligado a permanecer desnudo ante sus torturadores.

El informe consigna que el actor Carlos Sanhueza Saavedra se encuentra reconocido como víctima en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) del Estado de Chile, bajo el número de registro 22.685. También se encuentra reconocido como víctima de torturas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, para Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud de Chile.

En las conclusiones de dicho informe se lee que el actor “...fue secuestrado, torturado y mantenido como prisionero por agentes del Estado en recintos estatales durante un año, luego del golpe militar de 1973. Los hechos se encuentran acreditados y han sido reconocidos por el Estado de Chile.

Como consecuencia de la represión política sufrida, don Carlos Sanhueza Saavedra, perdió su vivienda y su trabajo; se vio separado de su esposa e hijos e imposibilitado de proveer su sustento; quedó con secuelas de tortura físicas y psicológicas permanentes. El conjunto del daño material sufrido, junto a las secuelas físicas de tortura, repercuten hasta hoy en la salud mental de la víctima.

Don Carlos Sanhueza Saavedra presenta sintomatología compatible con los diagnósticos de Transformación Persistente de la Personalidad tras Experiencia Catastrófica, Trauma Psicosocial,



Depresión. La represión política sufrida, especialmente la brutalidad de las torturas que le fueron infringidas, fracturaron no solo el curso de la vida de don Carlos Sanhueza Saavedra sino el desarrollo de su personalidad; la resistencia a la violencia del Estado ha sido un elemento estructurante de la manera de ser y de relacionarse socialmente de la víctima.

Don Carlos Sanhueza Saavedra fue dañado en la realización de su Proyecto de Vida Personal, el que podría haber seguido desarrollándose sin obstáculos, de no mediar la fuerza del Estado. Considerando que el proyecto de vida expresa la libertad personal de elegir como emplear el breve tiempo de la existencia humana, el daño sufrido es vivenciado por la víctima como irreparable. Junto con lo anterior, don Carlos Sanhueza Saavedra presenta daño permanente en su auto estima, especialmente a nivel de identidad social, entendida esta como aquel aspecto del autoestima relacionado con la adscripción a grupos sociales.

El daño que implica la tortura en las personas afectadas hace necesaria atención terapéutica especializada. Se recomienda que don Carlos Sanhueza Saavedra reciba terapia reparatoria y apoyo psicosocial de profesionales del Programa de Reparación Integral en Salud PRAIS, dependiente del Ministerio de Salud de Chile. Dado que el origen de la sintomatología psíquica de la víctima es consecuencia de la violencia ejercida por el Estado, el restablecimiento de la salud de don Carlos Sanhueza Saavedra, entendida como estado de completo bienestar bío-psico-social, tal como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, OMS, requiere de acciones de reparación de parte del Estado en diversos ámbitos, incluidos la compensación económica. La atención médico-psicológica no es suficiente, por sí sola, para resarcir el daño causado.

Así como los eventos traumáticos adquieren sentido en el marco de una política de Estado destinada a reprimir a un sector de la población, también la reparación del daño causado debe comprenderse en el marco de intervenciones que requieren del Estado una política de reparación amplia y satisfactoria para las víctimas, tal como ha señalado la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (2011) designada por el Gobierno de la República, para lo cual se recomienda aplicar las normas internacionales pertinentes a las que ha adherido el Estado chileno. ”

El contenido del informe del que se viene dando cuenta, impide que se suscite cualquier duda sobre la efectividad de las dolorosas vivencias pasadas, y de las penosas secuelas actuales que padece el actor, y que, por cierto, son consecuencia de los tratos inhumanos, crueles y degradantes a que fue sometido durante todo el tiempo que estuvo privado de su libertad, entre septiembre de 1973 y octubre de 1974.

Lo anterior, junto con la prueba testimonial rendida y dado que la parte demanda no contravirtió los hechos afirmados en la demanda,



permiten concluir, como bien lo hace la sentenciadora, que el demandante Carlos Sanhueza Saavedra, producto de circunstancias políticas, sufrió un brusco cambio en su proyecto vital, el que se vio violenta e irreparablemente interrumpido y modificado sustancialmente, quedando afectado por secuelas físicas y psicológicas que perduran hasta el día de hoy, luego de experimentar los horrores de la tortura, las humillaciones y vejaciones a propósito del tiempo que estuvo detenido por razones políticas y del estado de permanente amenaza y miedo con que vivió posteriormente.

DECIMOQUINTO: En el contexto señalado, cabe decir que la defensa del Fisco de Chile de que no se encontraría probado el daño moral es completamente contradictoria con la alegación de reparación integral derivada de las denominadas leyes de reparación, normativa que supone como cuestión previa el establecimiento de un daño.

DECIMOSEXTO: Igualmente, no se comprende el cuestionamiento realizado por el Fisco de Chile acerca del contenido del informe *PRAIS*, incorporado como elemento probatorio del daño moral experimentado por el demandante; resulta contradictorio que la demandada pretenda restar valor a ese informe, pese a que fue el propio Estado de Chile, quien institucionalizó el referido Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos.

DÉCIMOSEPTIMO: En cualquier caso, son indiscutibles las profundas consecuencias dañosas que provoca la tortura, la que infringe gran dolor físico y espiritual en la persona torturada, llevándola a límites insoportables, de manera que la postura del Fisco de Chile, en cuanto a que la información aportada en el informe *PRAIS* no hace plena prueba ni contiene elementos de convicción que puedan acreditar la magnitud del daño moral, al emanar de un simple instrumento privado, confeccionado principalmente en base a la propia versión del demandante, entregada varias décadas después del hecho dañoso, y que, por lo mismo, se refiere hechos que actualmente no se pueden constatar. Tal alegación resulta no solo liviana sino que impropia ante la situación indesmentible de que el actor fue víctima de violación sistemática de sus derechos humanos por parte de agentes pertenecientes al aparato estatal, porque si ello no fuera así, el Estado de Chile no habría reconocido que demandante Sanhueza Saavedra fue víctima de Prisión Política y Tortura, al incluirlo con el N° 22685, en la nómina confeccionada en el informe sobre la materia.

Cabe agregar, y esto para confirmar la efectividad del daño moral sufrido por Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra, que no es factible que un ser humano pueda salir indemne después de ser víctima de actos de barbarie extrema como los desplegados contra el actor en todo el tiempo que estuvo detenido. Ello es tan evidente que el mismo Estado de Chile ha debido reconocer la efectividad y consecuencias perniciosas de los actos de tortura, no sólo por las pruebas incontestables sobre su ocurrencia durante la época de la dictadura cívico militar, sino que como un necesario acto de reparación histórica,



la que se ve minimizada cada vez que el Fisco de Chile persiste en enarbolar defensas numerosas veces rechazadas por los tribunales nacionales en razón de su absoluta incompatibilidad con el sistema internacional de los Derechos Humanos, conducta procesal que, además, entorpece el proceso de sanación de las víctimas.

DECIMOCTAVO: No será oído el Fisco de Chile en cuanto a su reclamo de que se concedió al demandante un sistema de recargos no solicitado por esa parte en su libelo, en la que aspiraba a que la suma a otorgarse a título de indemnización por daño moral, lo fuera con los reajustes e intereses devengados desde la notificación de la demanda y hasta el pago total y efectivo de la misma.

Al efecto, esta Corte comparte el razonamiento de la *A Quo*, en cuanto a que siendo la sentencia apelada una de carácter declarativo, los derechos que reconoce y las obligaciones que impone, solo son exigibles desde que ella quede firme y ejecutoriada; en consecuencia, es desde ese momento que procede aplicar los reajustes, mientras que los intereses proceden en la medida que el demandado incurra en mora. Por ello la sentenciadora estableció que la indemnización otorgada deberá pagarse reajustada conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre las fechas en que esta sentencia quede ejecutoriada y la fecha del pago efectivo de la indemnización otorgada, devengando intereses corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional menores a un año, aplicados sobre la suma reajustada, desde que el demandado incurra en mora.

Visto de esa forma, el cuestionamiento del Fisco de que el período aplicado a los reajustes e intereses es diferente a lo pedido en la demanda, carece de sentido, ya que desde el punto de vista temporal el sistema de recargo otorgado en la sentencia apelada termina siendo menos oneroso que el solicitado por la demandante, situación que se encuentra dentro de las facultades del Tribunal y que, sin duda, no causa agravio a la parte demandada.

DECIMONOVENO: Teniendo presente las consideraciones antes vertidas, la indemnización por el daño moral sufrido por don Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra, será fijada en la suma de \$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos), incrementada en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto además, lo dispuesto en el artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se confirma, sin costas del recurso**, la sentencia apelada, de 19 de mayo de 2022, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Concepción, en los autos Rol C-1407-2020, **con declaración** que la suma que deberá pagar el Fisco de Chile por concepto de indemnización por daño moral en favor del demandante Carlos del Carmen Sanhueza Saavedra es de **ciento veinte millones de pesos (\$120.000.000)**, cantidad que se incrementará con los reajustes devengados entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada hasta la data de su pago íntegro y total. Sobre el capital así reajustado, se computarán intereses



corrientes para operaciones reajustables en moneda nacional menores a un año, los que deberán pagarse sobre la suma reajustada, desde que la parte condenada incurra en mora en el servicio de la obligación.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Redacción del ministro Waldemar Koch Salazar.

Aunque concurrió a la vista de la causa, al acuerdo del fallo y lo redactó, no firma el señor Koch, por estar haciendo uso de feriado legal.

N°Civil-1818-2022 y acumulada 1819-2022. Civil.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, integrada por los ministros titulares señora Nancy Aurora Bluck Bahamondes, señor Waldemar Augusto Manuel Koch Salazar y la abogada integrante señora Verónica Edith Sepúlveda Sánchez. No firma el señor Koch, por estar haciendo uso de feriado legal. Concepción, a veinticinco de septiembre del año dos mil veintitrés.

En Concepcion, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

